

El Tren de la Modernidad Política Casi se fue

Urge Pacto Para la Credibilidad

- ★ El Peligro: lo que Venga Después del 21 de Agosto
- ★ Mando Basado en la Convicción, no en la Coerción
- ★ No da Muestra Real el PRI de Cambiar su Actitud

LORENZO MEYER

El tren de la modernización mexicana integral ya pasó por la estación donde se encontraban Carlos Salinas y sus neoliberales. No lo abordaron porque estaban muy ocupados en la reforma macroeconómica. Sin embargo, hoy es evidente que fue un error haberlo dejado ir, pues en él iban las bases políticas de la

SIGUE EN LA PAGINA DIEZ

Sigue de la primera plana

estabilidad de esa nueva economía. Si el salinismo —bueno, lo que queda de él— corre, aún hay una pequeña probabilidad de que pueda treparse al cabús. No sería ésta una maniobra muy elegante, pero como veremos, la alternativa es peor.

Hoy por hoy, el problema del salinismo es la credibilidad. ¿Cómo definir credibilidad política?; una manera no particularmente científica pero sí exacta, es la siguiente: credibilidad es un elemento del que hoy carece el gobierno mexicano pero que le es indispensable e insustituible para un ejercicio efectivo de la autoridad en tiempos de crisis.

La credibilidad no es otra cosa que una disposición de ánimo favorable a la creencia en algo o alguien, a pesar de que la evidencia objetiva sea insuficiente. En el caso específico de la credibilidad de un gobierno, se trata del asentimiento y conformidad de los ciudadanos —o por lo menos de la mayoría de ellos— ante los hechos, explicaciones, promesas y carácter de los gobernantes.

El afirmar que existe un déficit creciente de credibilidad en el gobierno mexicano, no es novedoso ni mucho menos gratuito. Veamos un ejemplo actual. Mori de México, la organización especializada en encuestas de opinión pública que dirige Miguel Basáñez, en su sondeo semanal del 8 al 10 de abril, hizo la siguiente pregunta a 312 entrevistados por vía telefónica en cinco grandes ciudades del país: "¿Cree usted que se encuentre a los verdaderos culpables del asesinato de Colosio?"; 43% respondió que no, 34% dijo no saber y únicamente 23% dio una respuesta afirmativa. Así pues, apenas poco más de dos de cada diez entrevistados, mostró plena confianza en el gobierno en un asunto tan importante como es el esclarecimiento del asesinato del candidato presidencial del partido del Estado cuando estaba bajo la protección y el cuidado del Estado Mayor Presidencial.

En relación a la investigación oficial del asesinato en Guadalajara el año pasado del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, el obispo de Cuernavaca, Luis Reynoso —hablando en el contexto de la Conferencia del Episcopado Mexicano— declaró: "no quedamos satisfechos (los obispos) pero sí con esperanza de saber más". No creo exagerar si digo que muchos mexicanos estamos peor que los obispos: insatisfechos de las investigaciones sobre los asesinatos de Colosio, Posadas y sobre muchos más —Buenfía, Ovando, los cinco de Ocosingo, los tres del ejido "Morelia", etcétera—, pero sin mucha esperanza de su esclarecimiento.

La confianza en la autoridad es un elemento indispensable e insustituible de un buen gobierno. Es verdad que, en principio, la

autoridad gubernamental puede hacerse obedecer por la simple razón de la fuerza, pero en el largo plazo la fuerza o el temor nunca han sido la base de un buen gobierno. Y aunque en la base de toda forma de gobierno se encuentra la amenaza de imponer la obediencia por la fuerza, lo propio de una estructura de autoridad moderna, es que el mando se sustente básicamente en la convicción y no en la coerción.

Idealmente, la autoridad política debiera ser sinónimo de "poder legítimo", y la obediencia, ser resultado de esa legitimidad, pero no es posible legitimidad sin credibilidad. Por tanto, es urgente restaurar la credibilidad de la estructura de autoridad en nuestro país. Sólo con la inyección de una dosis masiva de confianza en la acción gubernamental se podrá hacer frente con éxito a la compleja y peligrosa dinámica que ya ha desatado el gran evento político que se aproxima a toda velocidad: el de las elecciones del 21 de agosto.

De acuerdo con la encuesta de Mori ya citada, la distancia que separa a los candidatos presidenciales del partido de Estado —PRI— y del PRD es de apenas 10%, y esta es casi la misma distancia que separa al candidato del PRD respecto del PAN. Pero además, una cuarta parte de los encuestados se negaron a declarar su preferencia. Así pues, es de estos últimos —los que no saben o no quieren decir por quién votarán—, de los que va a depender el resultado real de la elección. Se puede, desde luego, argumentar sobre lo representativo y el grado de confiabilidad estadística del sondeo de Mori (90%), pero de lo que ya no hay duda, es de la naturaleza auténticamente competitiva de la elección por venir.

Tras experiencias ridículas y vergonzosas como la candidatura única de José López Portillo, es muy alentador el que por fin esté echando raíces en México la competencia electoral. La única posibilidad de contar con un verdadero sistema político democrático es la institucionalización de esa competencia, pues sólo así el electorado tendrá opciones sustantivas respecto a líderes y programas. Sin embargo, lo que ensombrece lo que debería ser un horizonte brillante, es que en 1994 la competencia se va a dar justamente en el marco de la incredulidad ciudadana.

Una competencia electoral efectiva que tiene lugar en un ambiente de desconfianza en ascenso, donde se duda de la imparcialidad del gobierno en la campaña y, sobre todo, de la veracidad de los resultados oficiales, es una receta perfecta para hacer que el proceso postelectoral se convierta precisamente en lo que no debiera: en un conflicto que desborde los cauces institucionales, un conflicto que se sabe de dónde arranca pero no a dónde puede conducir, y la

ingobernabilidad es uno de los sitios a donde nos puede llevar.

Los preparativos del PRI para el 21 de agosto y lo que venga después, no son de ninguna manera tranquilizantes. De acuerdo con un documento del PRI del que obtuvo una copia el diario Reforma (16 de abril), ese partido ya tiene un plan diseñado por expertos en propaganda para, entre otras cosas, usar en su favor a las autoridades supuestamente neutrales. En efecto, en el plan "se contempla la selección de grupos de funcionarios pertenecientes a los organismos políticos, como el IFE, Secretaría de Gobernación... para que de manera discreta, programada y oportuna emitan declaraciones en el sentido y profundidad que se estimen necesarios para definir la dirección y el control de los debates". Como el problema no es la victoria oficial sino la credibilidad, el PRI ya se propone proclamar su victoria el 21 de agosto, y apoyarla, entre otras, en el "Testimonio de autoridades de casillas, manifestando no haber registrado anomalías". El partido de Estado sigue, pues, vivo y coleando; la separación anunciada por Colosio entre el PRI y el gobierno poco antes de su asesinato, no se ha dado, y menos la voluntad de efectuar elecciones limpias.

El PRI no da muestras reales de estar dispuesto a cambiar su actitud histórica, esa que dice: en México las elecciones pueden servir para muchas cosas, menos para decidir quién ha de gobernar. Y el hecho de que el famoso "grupo Atlacomulco" capitaneado por Carlos Hank González sea el que haya recibido el encargo de hacer ganar al nuevo candidato presidencial priísta, Ernesto Zedillo, hace aún más difícil que el resultado electoral del próximo agosto pueda ser creíble. La fama bien ganada de ese "grupo Atlacomulco" que está copando los puestos directivos de la campaña zedillista, no es precisamente el de ser amigo de la modernidad democrática, sino exactamente de lo contrario: de una férrea voluntad de prolongar el autoritarismo que tan buen negocio ha resultado para muchos de sus integrantes.

Mientras la vida política mexicana transcurrió dentro de la normalidad autoritaria creada y afianzada a lo largo de 65 años de control ininterrumpido de un partido de Estado, la credibilidad electoral no fue un factor particularmente importante, pues el mexicano común no tenía más opción que ceñirse a los dictados de la autoridad, le creyera o no, le gustara o no. Por mucho tiempo y hasta 1988, los mexicanos como conjunto no tuvimos verdaderas opciones políticas. Hoy la situación es diferente; a contrapelo de la realidad y superando infinidad de obstáculos, han surgido por fin las opciones, y por tanto, las elecciones van a ser

competidas, pero esta vez los opositores están mejor organizados que en 1988 —en particular el cardenismo—, y será más difícil para el presidente y el PRI asegurar la gobernabilidad del país frente a una oposición que se niegue a aceptar la legalidad de los resultados electorales.

Cuando la confianza en la autoridad es algo más que mera resignación, credulidad o ingenuidad, es resultado de la experiencia, algo que nace de un patrón de conducta de los gobernantes hacia los gobernados donde las promesas se cumplen, donde lo dicho corresponde a lo hecho. El salinismo sólo ha sido creíble en el plano de la macroeconomía. De ahí que la credibilidad salinista sólo sea fuerte entre la élite económica.

Para el público extranjero, la promesa salinista importante fue la de llevar a cabo un cambio económico neoliberal manteniendo el orden social y la estabilidad política. Como esta última parte de la promesa ya no se cumplió —Chiapas, Tijuana— la credibilidad salinista en el exterior ha disminuido y dramáticamente. Un buen ejemplo de ello, es un artículo reciente de Michael Elliot en el Newsweek (4 de abril). Según el articulista, en México se está pagando hoy el precio de haber llevado a cabo el cambio económico tratando de ahorrarse el costo político. El "error fatal", de Salinas, y del que según Elliot deben tomar nota los líderes de Asia y África, es este: "Si a una sociedad se le otorga la libertad económica, también se le tendrán que dar otras libertades: la de elegir a sus gobernantes y expresar abiertamente sus deseos. Si esto último no ocurre, el supuesto libertador económico será consumido por el fuego de las expectativas no cumplidas".

Al inicio del ensayo se propuso que quizá no todo está perdido en materia de credibilidad. En efecto, el presidente aún puede disminuir el peso histórico de su "error fatal". Por ejemplo, puede y debería hacer un gesto espectacular para separar a su gobierno y sus reformas económicas de la suerte de Ernesto Zedillo en particular y del PRI en general. Puede convocar a los líderes de la auténtica oposición —PRD y PAN— a una "reunión en la cumbre", y sentar, por fin, las bases de un auténtico pacto histórico. Un gesto así puede transformar lo que amenaza con ser un desastroso fin de sexenio, en algo distinto, positivo: en la transición del autoritarismo a la democracia.

Lo que hoy está en juego es la gobernabilidad del país después de agosto. Sin esa gobernabilidad, lo que se ha avanzado en el proyecto económico neoliberal, corre el riesgo de venirse abajo. Si este fuera el caso, entonces no habría ni modernidad política ni económica, y los perdedores serían no sólo los de siempre —los de abajo— sino también los de arriba.